

DECISIONES DIFICILES DEL PACTO

Evaluar las perspectivas de éxito del Plan Antiinflacionario no es tarea fácil. Cuando el ánimo colectivo es de armonía y concertación, la labor de criticar constructivamente puede ser ingrata. Por otra parte, nadie sabe hasta dónde el gobierno estará dispuesto a llegar en materia fiscal y cambiaria. En cualquier caso, el simple hecho de que los agentes económicos se hayan sentado a la mesa de negociaciones es ya positivo. Refleja la profunda preocupación que a todos nos embarga por el futuro inmediato del país.

Más importante aún es que, por primera vez, el gobierno se ha comprometido formal y públicamente a implementar un plan que restablezca los equilibrios macroeconómicos. Lo que aparentaba ser un intento de descargar en empresarios y trabajadores la responsabilidad inflacionaria, se ha convertido en una exigencia colectiva hacia el gobierno para que erradique las causas últimas de la inflación. Si lo que tenía paralizado al Ejecutivo era el costo político de una serie de medidas necesariamente dolorosas, ahora tiene la oportunidad de diluir ese costo entre los firmantes del pacto. Nunca antes había sido tan propicio el momento para actuar.

El día 29 de Mayo se produjo la firma de la declaración de intención del Pacto Antiinflacionario (PA), con el compromiso de las partes de elaborar en el plazo de 30 días un acuerdo de estabilización de precios. El tiempo apremia, porque, desde que se empezó a hablar del PA, la inflación ha mostrado un alarmante "crescendo" (4,1 por ciento en Abril, 4,9 en Mayo y no menos de 5 estimada en Junio). Comerciantes, industriales, trabajadores y consumidores se están curando en salud.

LOS COMPROMISOS DE LOS FIRMANTES

El PA tiene tres actores principales: gobierno, empresarios y trabajadores. Como es lógico, la principal lista de tareas le corresponde al gobierno. En la declaración de intención, a éste se le establecen los siguientes objetivos:

- Garantizar los equilibrios macroeconómicos
- Elevar la disciplina del gasto, mejorar la recaudación y disminuir la dependencia del ingreso fiscal petrolero
- Reorientar el gasto hacia la inversión social y la mejoría de los servicios
- Superar la emergencia financiera, restituir las garantías y eliminar los controles.

Más en concreto, el gobierno se compromete a implementar medidas en las siguientes áreas:

- Reducir el déficit fiscal de 1995 a 4 % del PIB
- Agilizar la privatización de las empresas públicas, liquidar los activos de Fogade, reprivatizar los bancos estatizados
- Reestructurar y modernizar la administración pública
- Revisar las tarifas públicas que no cubran los costos de producción
- Flexibilizar el control de cambio (control a posteriori de importaciones)
- Diseñar estímulos para reactivar la producción y el empleo.

Las obligaciones de empresarios y trabajadores son más escuetas. Fundamentalmente se obligan a no elevar los pre-

cios y los salarios más allá de un determinado porcentaje de la meta de inflación trimestral que se establezca. Ambos se comprometen también a participar constructivamente en la reforma del régimen de prestaciones sociales.

Como el lector podrá observar, la declaración de intención es todavía lo que su nombre indica: un listado de "buenas intenciones". Viene ahora la fase de precisar el **qué**, el **cuánto**, el **cómo** y el **cuándo**. Esperemos que no se encasquillen las negociaciones, porque más tiempo de discusiones significará más inflación.

LO QUE NO MEJORA, EMPEORA

Mucha gente, sobre todo los entendidos en economía, se han mostrado escépticos respecto a las posibilidades de éxito del PA. Su pesimismo radica en que el Ejecutivo ha venido rechazando cuanto plan de ajuste fiscal/cambiario se le ha presentado, desde los tiempos en que Asdrúbal Baptista, para ese entonces ministro del gobierno, hizo los primeros planteamientos. ¿Por qué razón habría de aceptarlo ahora? Se me ocurre que pudieran aducirse dos circunstancias, que dan pie a cierta esperanza. La primera, ya mencionada al principio, se refiere a la excelente oportunidad que se le presenta al gobierno de eludir el costo político de una serie de medidas impopulares (por ejemplo, aumentar la gasolina). El presidente Caldera pudiera alegar que los participantes en el PA así se lo han pedido.

Y la segunda circunstancia favorable, aunque suene paradójica, es que las cosas están hoy peor y, sobre todo, que el gobierno así lo está reconociendo. La economía no petrolera continuó estancada durante el primer trimestre (disminuyó en 0,2 por ciento). El desempleo oficial pasó de 8,7 a 11,7 por ciento. La inflación muestra un ascenso sostenido desde Febrero pasado. La caída del salario real, reiniciada en 1993 después de un breve repunte entre 1990 y 1992, se ha acelerado desde mediados del año pasado. La inversión cayó 20 por ciento en 1994 y este año no se ha recuperado.

Miguel Ignacio Purroy

En contextos económicos como el actual, lo que no mejora, empeora. Las medidas necesarias para salir del atolladero son cada vez más drásticas y dolorosas

Se ha cortado abruptamente el flujo de inversiones y de préstamos del extranjero. No se ha privatizado absolutamente nada. Hay una excesiva demanda de divisas para importaciones.

Todo esto lo saben los ministros de la economía (espero que también se lo hayan dicho al Presidente). Como también saben que, cada vez que los técnicos presentan las cifras con motivo de una nueva versión del plan de estabilización, el hueco fiscal estimado se ha acrecentado. A principios de año el déficit financiero estimado era de 500 MMM de bolívares, después pasó a 700 MMM en Marzo y ahora se calcula en 1.000 MMM (un billón). Primero se hablaba de incrementar el impuesto sobre las ventas a 15 %, ahora se habla de 17 %. Inicialmente estaba planteado aumentar la gasolina a 18 Bs./litro, ahora sería necesario llevarla a 27 Bs. para cuadrar las cuentas. En Enero hubiera bastado devaluar a 190 Bs./\$, ahora haría falta llevar el dólar a 230 Bs.

Definitivamente, en contextos económicos como el actual, lo que no mejora, empeora. Las medidas necesarias para salir del atolladero son cada vez más drásticas y dolorosas. Quizás por este aprendizaje de ver el deterioro progresivo de los indicadores, los responsables de la política económica parecieran estar hoy más dispuestos a hacer algo. La gran incógnita es si se atreverán a tomar "el toro por los cachos" o si continuarán con esa ambigüedad de hacer las cosas a medias - las buenas y las malas -, que ha caracterizado a este gobierno desde el principio.

LA DIFÍCIL DECISION DE DEVALUAR

Una de las decisiones cruciales a tomar se refiere al nivel del tipo de cambio, así como a la normativa de control cambiario. Después de un año de vigencia, el control de cambio está haciendo agua por todas partes. Ya no sirve para anclar los precios, como lo demuestran las cifras mensuales de inflación. Más bien, la congelación del tipo de cambio a 170 es el principal factor que está hoy alimentando la expectativa inflacionaria.

Tampoco está sirviendo para preservar las reservas internacionales. A causa del dólar subsidiado, hay una presión excesiva de demanda para importaciones. La OTAC continúa autorizando un promedio diario (hábil) de más de 50 millones de dólares, cuando no debería pasar esa cifra de 30 millones. Arguyen que nadie les ha fijado prioridades para recortar, pero no deja de ser irresponsable lo que están haciendo. La fuga de capitales continúa, solo que ahora toma la forma de comercio exterior. Prácticamente se ha paralizado la entrada de capitales.

A pesar de todo lo anterior, este año no tendremos todavía problemas serios de balanza de pagos gracias al buen desempeño de las exportaciones públicas y a los atrasos en el servicio de la deuda privada y de la deuda pública no reestructurada. Tendrá, sin embargo, el gobierno que moderar también la entrega de divisas para importaciones, ya sea encareciendo el dólar o restringiendo los cupos. Pero la insostenibilidad del actual tipo de cambio congelado no se deriva tanto de las presiones inmediatas sobre la balanza de pagos, como del hecho de que cualquier programa antiinflacionario tiene que empezar por desmontar la expectativa que genera un valor excesivamente bajo de la divisa. Mientras los agentes

Nunca antes había sido el tiempo tan propicio para actuar



Una de las decisiones cruciales a tomar se refiere al nivel del tipo de cambio, así como a la normativa de control cambiario. Después de un año de vigencia, el control de cambio está haciendo agua por todas partes.

Cualquier programa antiinflacionario tiene que empezar por desmontar la expectativa que genera un valor excesivamente bajo de la divisa.

económicos perciban, con razón o sin ella, que se avecina una maxidevaluación, los precios continuarán subiendo.

Aparte de este efecto de expectativas, a mediano plazo un tipo de cambio demasiado bajo daña el aparato productivo. Las empresas exportadoras empiezan a perder competitividad y las importaciones baratas comienzan a desplazar a la producción nacional. Los economistas usamos el índice de "cambio real" para medir la competitividad de la economía. Este índice refleja la relación (cociente) entre los precios de los bienes importables (transables) y los precios de los bienes no importables (no transables). Una inflación interna mayor que la externa disminuye el tipo de cambio real. Una devaluación, por el contrario, tiene el efecto inmediato de aumentar el tipo de cambio real. Cuando el cambio real aumenta, las exportaciones se incentivan y las importaciones se desestimulan.

El índice de cambio real es una buena guía para fijar el precio de la divisa. Un

El problema es de tal magnitud que no bastan recortes espasmódicos de gastos, ya que, al final, éstos no son sostenibles mientras no se proceda a una reestructuración a fondo del Estado.

Y debe acabarse de una vez por todas con esa vergüenza nacional e internacional, que es el regalo de la gasolina

análisis de su evolución histórica nos dice que hoy el cambio real es un 32 % más bajo que el promedio de los años 89-91 y un 25 % inferior al promedio de los años 92-93. La conclusión de estas comparaciones es que hace falta un ajuste importante del tipo de cambio para preservar el equilibrio macroeconómico a mediano plazo. Hablar de una devaluación a 230 Bs./\$ luce inclusive conservador, ya que a ese nivel nominal el promedio del cambio real de 1995 todavía sería un 15 % inferior al del período 92-93.

EL NUDO GORDIANO DEL DEFICIT FISCAL

La segunda decisión importante en el marco del PA se refiere al saneamiento de las finanzas públicas. Hasta tanto no pongamos orden allí, ni el abatimiento de la inflación ni la reactivación de la economía serán posibles. Como decía más arriba, conforme pasan los meses el hueco financiero del Estado se agranda. Lo grave es que este empeoramiento del déficit se produce a pesar de que la presión tributaria interna (no petrolera) ha venido aumentando sostenidamente desde 1990, cuando representaba apenas un 4 % del PIB, hasta llegar a casi 11 % del PIB en este año. Pero sucede que, simultáneamente, el ingreso fiscal petrolero ha caído de 19 % del PIB en 1990 a 7,5 % en este año, el nivel más bajo en la historia moderna del país.

El problema es de tal magnitud que no bastan recortes espasmódicos de gastos, ya que, al final, éstos no son sostenibles mientras no se proceda a una reestructuración a fondo del Estado. Hay un serio problema de eficiencia del gasto, que se diluye en la burocracia y no llega al ciudadano "final" en forma de servicios. Hay que replantear todo el complejo tema del Situado Constitucional y de la descentralización administrativa

(transferencia de competencias). Hay que encontrarle una solución a la inmensa bola de nieve de los pasivos laborales por prestaciones sociales. El Estado debe deslastrarse urgentemente de las empresas públicas, de los bancos estatizados, de los activos de Fogade, etc., y el producto de esas ventas debe destinarse íntegramente a rebajar la deuda pública.

Lamentablemente, mientras tanto, no queda más remedio que seguir aumentando la presión tributaria interna. El IVA (aumento de tasa y mejor recaudación) y el ISLR (mejor recaudación) son las dos fuentes inmediatas y sanas para hacerlo. Y debe acabarse de una vez por todas con esa vergüenza nacional e internacional, que es el regalo de la gasolina.

CRECIBILIDAD CON SACRIFICIO

En el combate de la inflación, la credibilidad del programa es fundamental. La primera condición es que las medidas sean suficientes. De nada sirve, por ejemplo, prometer una reducción del gasto fiscal en 300, cuando el hueco es de 1.000. Puede ser que este año no sea posible cerrar completamente la brecha, pero deben ponerse ya en marcha acciones estructurales que hagan viable el equilibrio en el plazo de un par de años. Y la segunda condición es que la estrategia sea global y coherente. No surte ningún efecto invitar al capital extranjero a participar en las privatizaciones, si simultáneamente se están estableciendo esquemas regulatorios que no garantizan una viabilidad financiera de la inversión.

Una buena dosis de costo inflacionario será inevitable en la primera fase del programa de estabilización. La sociedad venezolana debe estar dispuesta a asumir sacrificios. Pero también tiene derecho a exigir que después de un plazo razonable - digamos, un año - comiencen a verse los frutos en términos de más empleo y más oferta de bienes a precios estables. Sólo así sería socialmente viable el programa de estabilización. Ahora bien, la condición *sine qua non* para que esos frutos se materialicen es que la inversión privada comience a fluir de nuevo. Y aquí

Un pacto antiinflacionario, para que tenga éxito perdurable, debe empezar por poner orden en las cuestiones macroeconómicas básicas. Y ésa es responsabilidad primordial del gobierno

no valen apelaciones morales o promesas huecas. La confianza se construye con políticas económicas serias y coherentes.

Esta reflexión nos lleva a la tercera decisión importante que debe afrontar el gobierno. No hay forma sana (no inflacionaria) de cubrir el déficit de este año, si no es con ayuda de financiamiento externo. Harían falta cerca de 3.000 millones de dólares. Tal masa de recursos externos no vendrá, si no se llega a un acuerdo de "buena conducta" con los organismos multilaterales y específicamente con el FMI. Lo que el Fondo nos va a pedir es que se apliquen los ajustes que muchos venezolanos llevamos planteando hace tiempo. La importancia del visto bueno del Fondo no radica tanto en los préstamos que pueda otorgar, sino en que señalará la luz verde para que se restituyan los flujos de financiamiento e inversión del exterior, tanto públicos como privados. Sin estos flujos, será del todo imposible reiniciar el crecimiento económico.

Observará el lector que no son nada fáciles las decisiones que una política antiinflacionaria implica. Para erradicar la inflación no basta sentar a empresarios y trabajadores en una mesa y pedirles moderación. Ojalá fuera tan sencillo. Un pacto antiinflacionario, para que tenga éxito perdurable, debe empezar por poner orden en las cuestiones macroeconómicas básicas. Y ésa es responsabilidad primordial del gobierno. El resto de los firmantes tenemos la responsabilidad de asumir nuestra cuota de sacrificio y de apoyar activamente las buenas medidas oficiales. Y de criticar las malas. □

Miguel Ignacio Purroy es economista, ex Director del BCV

Nota del autor: Próximamente me trasladaré a Oxford para ocupar la Cátedra Andrés Bello en esa universidad. Durante un año estaré distanciado del día a día del acontecer venezolano y no me será posible contribuir con los acostumbrados análisis de la actualidad económica. Quizás encuentre algún otro tema de interés para no perder la costumbre de escribir.